

Poder Judicial de la Nación

Buenos Aires, 7 de marzo de 2025.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en el presente incidente de extinción de la acción **CPE 672/2013/TO1/4**, formado en las actuaciones caratuladas "**GALVÁN, CÉSAR JAVIER S/inf. Ley 24.769**" (art. 9), del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico nro. 1, con relación al imputado César Javier Galván (DNI N° 22.266.425, de nacionalidad argentina, nacido el 21 de octubre de 1971 en la localidad de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires, hijo de Domingo César y de Elisa Paulina Schwarz, con domicilio en la calle 878 N° 4046 de la localidad de Villa La Florida, Quilmes, Pcia. de Buenos Aires);

Y CONSIDERANDO:

I. Imputación

1) Que, en primer lugar, cabe recordar que el objeto procesal de autos se circunscribe a la presunta omisión de depósito, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencidos los respectivos plazos de ingreso, de los importes que se habrían retenido a los empleados de la sociedad **VENGER S.A.**, en concepto de aportes al régimen de la seguridad social, correspondientes a los períodos diciembre de 2011 y junio de 2012, por la suma de \$ 111.684,59 y \$ 118.286,29, respectivamente; sucesos que fueron encuadrados legalmente en las previsiones del art. 9 de la ley 24.769 (según ley 26.735) y atribuidos a César Javier GALVÁN en calidad de autor (cfr. surge de los requerimientos de elevación a juicio, a cuyo contenido cabe remitirse por cuestiones de brevedad).

2) Que, radicada la causa en este Tribunal Oral, luego de citar a las partes a juicio en los términos del art. 354 del CPPN, se proveyó la prueba oportunamente ofrecida por



Poder Judicial de la Nación

el representante del Ministerio Público Fiscal; y cumpliéndose con las medidas de instrucción suplementaria requeridas se fijó audiencia de debate (confr. decreto de fecha 20 de septiembre de 2022).

II. Planteos de las partes y decisiones relevantes

3) También resulta pertinente recordar que a fs. 2/7 del incidente de suspensión del juicio a prueba¹ la defensa de César Javier Galván solicitó la suspensión del juicio a prueba, por el término de un año, en los términos del art. 76 bis del Código Penal, y expresó en esa oportunidad que se verificaba uno de los supuestos que prevé la ley sustancial para admitir tal solicitud, y que su asistido, en calidad de "tercero interesado", procedió a la cancelación total y absoluta del reclamo efectuado por el organismo recaudador, lo cual incluyó capital e intereses; comprometiéndose a su vez a cumplir con las reglas de conducta que se determinen, en función de la naturaleza del hecho y las calidades personales del imputado².

4) Que en relación a tal solicitud, con fecha 22 de abril de 2024, este Tribunal resolvió "**I. NO HACER LUGAR a la suspensión del juicio a prueba** solicitada por el imputado César Javier Galván (art. 76 bis -último párrafo- del Código Penal, según ley 26.735), **SIN COSTAS** (art. 530 y 531 del C.P.P.N.). **II. SUSPENDER LA ACCIÓN PENAL** emergente de las presentes actuaciones respecto de César Javier Galván (titular del D.N.I. Nro. 22.266.425, cuyas demás condiciones personales obran en autos), hasta tanto el nombrado cumpla con la donación de la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000), en favor de la fundación "Garrahan"; debiendo aportar al Tribunal las constancias que acrediten su

¹ Registrado bajo el CPE 672/2013/T01/3.

² Ver fs. 2/7 de las mencionadas actuaciones CPE 672/2013/T01/3.



Poder Judicial de la Nación

cumplimiento. **III. DISPONER** que, una vez cumplida la obligación aludida en el punto anterior y que se paguen las costas del proceso, corresponderá proceder en función de lo previsto por el inciso 6° del artículo 59 del Código Penal..."³

5) Posteriormente, con fecha 8 de mayo de 2024, la querella interpuso recurso de casación contra dicho decisorio, el que fue concedido por este Tribunal con fecha 10 de mayo de 2024, habiéndose desinsaculado la Sala III de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal a los fines de su intervención en dicha vía recursiva.

6) A su vez, encontrándose en trámite dicha vía recursiva, mediante presentación de fecha 30 de julio de 2024, la defensa promovió solicitud -en el marco de lo regulado en el art. 5, segundo párrafo, de la Ley 27.743- a los fines de que se declare la extinción de la acción penal por la cancelación total de la deuda en relación a los hechos imputados a su asistido Cesar Javier GALVÁN y, peticionó que en consecuencia, se decrete el sobreseimiento del nombrado (arts. 334 y 336, inc. 1°, del C.P.P.N.); todo ello, sobre la base de los argumentos allí desarrollados, a los que se remite por razones de brevedad⁴.

7) Vale recordar, que por decreto de fecha 1/8/2024, se estableció en este incidente que "*Sin perjuicio de lo manifestado por la defensa de César Javier GALVÁN (en cuanto consideró que lo planteado podía ser resuelto sin previa vista a las partes) [...] corresponde darle intervención a las partes, a fin de otorgarles la posibilidad de opinar sobre el planteo formulado por esa defensa (el cual, a todas luces, resulta novedoso, en tanto no ha sido planteado -ni,*

³ Ver fs. 4/33 de las actuaciones CPE 672/2013/T01/3.

⁴ Ver fs. 1/ 2 de este incidente.



Poder Judicial de la Nación

por ello, sustanciado- con anterioridad). Ello, guarda correspondencia con lo establecido en el art. 340 del C.P.P.N., por el que se establece que 'del escrito en que se deduzcan excepciones se correrá vista al ministerio fiscal y a las otras partes interesadas', como así también responde a los principios de bilateralidad y contradicción propios del proceso penal..."⁵.

8) Consecuentemente, conferida la vista respectiva al representante del Ministerio Público Fiscal, dictaminó que "... a fin de evitar posibles decisiones contradictorias, considero que corresponde diferir el pronunciamiento sobre el planteo defensista a resultas de la decisión que adopte la Sala 3era. de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal en el recurso interpuesto por la parte querellante -AFIP-, actualmente en trámite..."⁶.

9) Por su parte, en ocasión de darle intervención en primer lugar a la parte Querellante en este incidente, sostuvo que la solicitud de extinción de la acción penal articulada en el marco de lo dispuesto por la ley 27.743 debía ser rechazada "... por encontrarse la situación del imputado dentro de las exclusiones previstas por el art. 4, específicamente la descripta en el inciso m)..." , por cuanto dicha disposición legal establece que "... quedan excluidos de lo dispuesto por el presente régimen: (...) m) Los agentes de retención y percepción **que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral** por la comisión de cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o

⁵ Ver decreto obrante a fs. 3 de esta incidencia.

⁶ Ver fs. 4/5 de este incidente.



Poder Judicial de la Nación

en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones..."⁷.

10) Que, mediante presentación incorporada a este incidente con fecha 17/12/2024, la defensa sostuvo -en síntesis- que "... nuestro asistido NO ES VENGER S.A., por lo tanto no resultaba ser el sujeto obligado al pago del tributo objeto de discusión en autos, y ello lo dejo en claro al momento del primer planteo en CASACIÓN y el pago realizado, cuando manifiesto porqué y en que carácter hacía dicho emolumento. Ahora bien, lo más grave aún, es la lectura e interpretación sesgada, restrictiva y de mala fe, dada a la letra de la ley, ya que de la lectura integral de la norma, surge claro que el artículo 4 hace mención que quedarán excluidos del régimen los distintos incisos detallados allí, como el m) mencionado, pero ello es de aplicación, para aquellos que pretendan ingresar al régimen previsto por la norma en cuestión, a partir de su entrada en vigente, sin pago realizado. Muy distinto resulta la situación prevista por el art. 5 de la mentada Ley la cual reza en su tercer párrafo que 'También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.' -el destacado y subrayado me pertenece- Justamente, el término 'también' y de 'pleno derecho' demuestra claramente que el legislador ha previsto e incluido en el beneficio de la ley a aquellos casos sometidos ya a

⁷ Ver fs. 5 de estas actuaciones.



Poder Judicial de la Nación

procesos, PERO QUE POSEEN CANCELADAS SUS DEUDAS COMO EL CASO DE AUTOS PREVIO A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA NORMA, y sin SENTENCIA FIRME -con lo cual obviamente están los procesados y elevados a juicio-, con lo cual no termina de comprenderse cuál es la interpretación que pretende dársele a la norma y a esa previsión en particular, cuando el legislador a sido por demás claro y concreto, sobre su aplicación de pleno derecho y por ende la operatividad de la misma, para casos judicializados en cualquier estado proceso, ahora bien sin sentencia firme, y con cancelación total..."⁸.

11) Que, posteriormente, en el marco del incidente registrado bajo el **CPE 672/2013/T01/3/CFC1**, la Sala III de la Excma. Cámara Federal de Casación Penal resolvió "... **HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la parte querellante, sin costas; **CASAR** la resolución recurrida y remitir las actuaciones al tribunal de origen para que se continúe con la sustanciación de las presentes actuaciones, conforme su estado (arts. 470, 530 y 531 del CPPN)..."⁹.

12) Al respecto, cabe recordar que el suscripto señaló -con fecha 20 de diciembre de 2024- que, en ese entonces, todavía no resultaba ejecutable la decisión del Tribunal de Alzada, por lo que correspondía aguardar si se interponía recurso extraordinario federal contra aquella resolución y, en tal caso, si el Tribunal de Casación decidía concederlo o no.

Asimismo, se consideró que, en el entendimiento de que la resolución del Tribunal de Alzada -reseñada en el considerando anterior- resultaba ser una nueva circunstancia, debía otorgarse nueva vista a la Fiscalía por el planteo de

⁸ Ver presentación obrante a fs. 6/8 de este incidente.

⁹ Cfr. resolución de fecha 19/12/2024, que puede verse en el incidente de suspensión del juicio a prueba (CPE 672/2013/T01/3).



Poder Judicial de la Nación

extinción de la acción en razón de la Ley 27.743; y que, del mismo modo, correspondía hacer saber a la defensa y a la querella que -dentro del plazo de tres días- podrían realizar las manifestaciones que consideren pertinentes, en forma previa al pronunciamiento de este Tribunal sobre lo que resulta materia de este incidente.

13) En ese orden de ideas, conferida nueva vista a la representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que "... habiéndose verificado que se han cancelado las obligaciones emergentes de los hechos de marras con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen de la ley 27.743, no verificándose respecto del imputado ninguna de las exclusiones previstas por la ley 27743, entiendo que corresponde hacer lugar al planteo de extinción de la acción penal efectuado por la defensa de Cesar Javier GALVAN, en función de lo dispuesto por el art. 5 de dicho cuerpo legal y declarar extinguida la acción penal emergente de autos, dictando el sobreseimiento del nombrado en función de los arts. 336 inc. 1 y 361 del CPPN..."¹⁰.

Ello, sobre la base de las manifestaciones y argumentos expuestos por la referida parte, a cuya presentación se remite por razones de brevedad y a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

14) Por su parte, otorgada nueva intervención a la parte Querellante, reiteró que el planteo formulado por la defensa en este incidente no debía tener acogida favorable, por los mismos argumentos que fueran desarrollados al contestar la vista otorgada a fs. 4 del presente -que fueran reseñados en el considerando 9)-, a los que corresponde remitir.

III. Análisis sobre la cuestión planteada

¹⁰ Ver dictamen de fecha 11 de febrero del corriente.



Poder Judicial de la Nación

LA-0-11000000

15) Previo a todo, cabe recordar que -según se consignó en el considerando 12° de la presente- se ha establecido en autos que la resolución del Tribunal de Alzada -dictada en el marco del incidente de suspensión de juicio a prueba registrado bajo el CPE 672/2013/T01/3- resultaba ser una nueva circunstancia, por lo que correspondía otorgar nueva vista a la Fiscalía en orden al planteo de extinción de la acción en razón de la ley 27.743, que motivara la formación de esta incidencia; y que, en la misma inteligencia, correspondía hacer saber a la defensa y a la querella que -dentro del plazo de tres días- podrían realizar las manifestaciones que consideren pertinentes, en forma previa al pronunciamiento de este Tribunal sobre lo que resulta materia de este incidente; efectuando las partes las presentaciones correspondientes que surgen agregadas a estas actuaciones, según la reseña desarrollada en el punto II de la presente.

Asimismo, cabe recordar que el Superior encomendó a este Tribunal en aquella decisión que debía continuarse con la sustanciación de las presentes actuaciones, conforme su estado, por lo que este incidente quedó en condiciones de ser resuelto, en orden a la cuestión introducida.

16) Establecido ello, corresponde señalar en primer lugar que la ley 27.743¹¹ -tal como lo dispone su art. 1- estableció el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

Conforme se desprende de la mencionada normativa, dicho Régimen -excepcional- se creó con el fin de lograr el pago voluntario de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras (art. 1), a efectos de que se acojan contribuyentes y **responsables** de las obligaciones

¹¹ Publicada en el Boletín Oficial el 8/7/2024.



Poder Judicial de la Nación

tributarias, aduaneras y **de los recursos de la seguridad social**, por obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de marzo de 2024¹², inclusive (art. 2 de la ley); ello, a fin de obtener distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren -entre los cuales se encuentra la extinción de la acción penal en el caso de la cancelación total de la deuda que se trate-.

17) Cabe destacar que, a partir de lo dispuesto en el art. 3 de la referida ley 27.743, se determinó que las obligaciones incluidas en el mencionado Régimen son las siguientes: "... a) Aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa (incluye las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación) o contencioso administrativa (incluye cualquier causa en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allane y/o desista, según corresponda, incondicionalmente por las obligaciones regularizadas; y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento y/o el desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso, dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen; b) Aquellas obligaciones respecto de las cuales hubieran prescripto las facultades de la Administración Federal de Ingresos Públicos para determinarlas y exigirlas, y **sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables**; c) Aquellas obligaciones que nacieron en el marco de la ley 27.605; d) Aquellas obligaciones de los agentes de retención

¹² Plazo que fue prorrogado al 08/11/24 a partir del Decreto 977/2024.



LACTOS

18) Además, en el mencionado Régimen -precisamente en su art. 4-, se enumeran los supuestos que quedan excluidos del alcance de dicha normativa, a saber: "... a) Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales; b) Las deudas por cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART); c) Los aportes y contribuciones con destino al régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico y/o el personal de casas particulares; d) Las cotizaciones correspondientes a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS); e) Las cuotas correspondientes al Seguro de Vida Obligatorio; f) Los aportes y contribuciones mensuales con destino al Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) y al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE); g) Los tributos y/o multas que surjan como consecuencia de infracciones al artículo 488, Régimen de Equipaje del Código Aduanero, ley 22.415 y sus modificaciones; h) Los intereses -resarcitorios



Poder Judicial de la Nación

LA-0-11000000

y/o punitorios-, multas y demás accesorios relacionados con los conceptos precedentes; i) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración; j) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por alguno de los delitos previstos en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; k) Los condenados -con condena confirmada en segunda instancia- por delitos comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; l) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido condenados -con condena confirmada en segunda instancia- con fundamento en las leyes 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, 23.771 y/o 24.769 y sus modificaciones y/o en el título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones (Régimen Penal Tributario), o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado sentencia de segunda instancia con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen; m) **Los agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral por la comisión de**



Poder Judicial de la Nación

cualquiera de los delitos tipificados en el artículo 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, y/o en los artículos 6° y 9° de la ley 24.769 y sus modificatorias y/o en los artículos 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones..." (lo resaltado pertenece a la presente).

19) Ahora bien, en particular y en lo que aquí respecta, el art. 5 del mencionado Régimen establece que "El acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme."

"La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Igual efecto se producirá cuando se cancele, por parte de cada imputado, la deuda que le fuera exigible de manera individual (conforme la imputación penal efectuada), en las condiciones previstas en el presente régimen."

"También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha. Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos queda dispensada de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas



Poder Judicial de la Nación

con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen...".

"... En el caso de las obligaciones y recursos de la seguridad social, la cancelación total -de contado o mediante plan de facilidades de pago- de los aportes y contribuciones producirá la extinción de la acción penal sin perjuicio que los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales no se encuentren regularizados..." (lo resaltado pertenece a la presente).

20) Que, en ese contexto, en la medida en que las obligaciones tributarias derivadas del objeto de imputación en la presente causa (enunciadas en el considerando 1 de la presente) vencieron con anterioridad al 31/03/2024, fueron canceladas por el responsable solidario de la firma VENGER S.A. en el marco de las condiciones previstas por la ley 27.743¹³ y que no se advierte ninguna de las causales excluyentes prescriptas por la referida norma (ver lo prescripto en el art. 4° del régimen), resultan aplicables los beneficios establecidos en aquella norma, tal como se verá seguidamente.

A. Sobre el particular, la Querella informó, previa consulta a la Agencia N° 50 de la ARCA, "... que los períodos consultados Diciembre 2011 y Junio 2012 se encuentran cancelados, tanto el capital como los intereses resarcitorios...", adjuntando pantalla de pagos DDIT y Pantalla de Sistemas de Cuentas Tributarias, donde se visualiza la cuenta del contribuyente con los períodos abonados, con fecha 13 de marzo de 2024¹⁴.

¹³ Cancelación que se produjo con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen de la mencionada ley 27.743.

¹⁴ Ver informe incorporado a este incidente con fecha 1/8/2024, que luce a fs. 3 de estas actuaciones.



Poder Judicial de la Nación

L
A
C
O
P
O
S
C

B. La circunstancia precedentemente señalada, configura el supuesto contemplado por el art. 5 de la referida ley; en tanto y en cuanto, *"La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen -de contado o mediante plan de facilidades de pago- producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación [...]* **También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha"**.

C. A su vez, cabe recordar que en oportunidad de otorgarle intervención en el marco de este incidente, la Querella solicitó el rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal a través de la alternativa regulada en la ley 27.743, en base a la única objeción que desarrollara, en el entendimiento de que el imputado **CÉSAR JAVIER GALVÁN** se encuentra comprendido dentro de las exclusiones previstas por el inciso m) del art. 4 de dicha norma.

Sobre este criterio, es necesario señalar en primer término, que de esta última norma, se advierte una remisión a lo previsto en los artículos 8° de la ley 23.771 y sus modificatorias, 6° y 9° de la ley 24.769 y sus reformas, y 4° y 7° del título IX de la ley 27.430 y sus modificaciones.

Ahora bien, sin perjuicio de que, como sujetos alcanzados por dicho inciso se indican específicamente a los *"agentes de retención y percepción que se encuentren con auto de procesamiento firme y elevada la causa a juicio oral"*, el legislador completó dicha exclusión con las conductas que aquellos deberían haber llevado a cabo para que aquella



Poder Judicial de la Nación

opere; y, esas conductas, son las tipificadas por los artículos referidos en el párrafo que antecede.

Todo ello exige analizar los tipos penales en trato, para identificar cuál es, en definitiva, el supuesto que excluye el inc. m) del art. 4 de los beneficios otorgados por el propio Régimen.

En consecuencia, corresponde recordar que, en primer lugar, el art. 8 de la ley 23.771 reprimía "... con prisión de dos a seis años, el agente de retención o de percepción que no depositare o mantuviere en su poder, total o parcialmente el tributo percibido o retenido, o los aportes y contribuciones, retenidos, a los organismos nacionales de seguridad social conforme con lo previsto en el artículo 3 después de vencidos los plazos en que debió ingresarlos..." (lo subrayado pertenece a la presente).

Por otro lado, la ley 24.769 en su art. 6, imponía igual consecuencia jurídica a las conductas llevadas a cabo por "el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" (lo subrayado pertenece a la presente) consistentes en no depositar, total o parcialmente, dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cuarenta mil pesos (\$40.000) por cada mes.

A su vez, el art. 9 del mismo cuerpo normativo prevé que "será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no



Poder Judicial de la Nación

ingresado superase la suma de veinte mil pesos (\$20.000) por cada mes.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de veinte mil pesos (\$20.000) por cada mes." (lo subrayado pertenece a la presente).

Por su parte, y en el mismo sentido, el Régimen Penal Tributario consagrado en el título IX de la ley 27.430, establece en su art. 4 que "será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el agente de retención o de percepción de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no depositare, total o parcialmente, dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el tributo retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado, superare la suma de cien mil pesos (\$ 100.000) por cada mes." (lo subrayado pertenece a la presente).

Asimismo, el art. 7 del mencionado Régimen dispone que "Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes.

Idéntica sanción tendrá el agente de retención o percepción de los recursos de la seguridad social que no depositare total o parcialmente, dentro de los treinta (30)



Poder Judicial de la Nación

días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe retenido o percibido, siempre que el monto no ingresado superase la suma de cien mil pesos (\$ 100.000), por cada mes." (lo subrayado pertenece a la presente).

En consecuencia, de los tipos penales descriptos, se advierte una expresa diferenciación en los destinatarios de dichas normas. Sin perjuicio de que la conducta típica sea, en todos los casos, la de no depositar -en el respectivo plazo legal- el monto retenido al trabajador en concepto de cargas sociales, lo cierto es que, específicamente, se previeron dos supuestos distintos en las mismas disposiciones legales con la única finalidad de diferenciar los casos en los que el sujeto activo sea "agente de retención o percepción" de los recursos de la seguridad social, o bien cuando sea el "empleador".

Aquello, demuestra que el legislador tuvo la voluntad expresa de distinguir un sujeto activo del otro en el mismo tipo penal.

Pues bien, debe recordarse que en la redacción original de la ley 24.769¹⁵, esta diferenciación no se encontraba consagrada, en la medida que solo aludía -como destinatario de la disposición legal- al "agente de retención de aportes del sistema de seguridad social nacional". Sin embargo, a partir de la reforma de la ley 26.063, expresamente se incorporó la mencionada distinción entre los "empleadores" y los "agentes de retención y percepción de los recursos de la seguridad social"¹⁶, que incluso fue mantenida luego por la ley 26.735 y en el Régimen Penal Tributario consagrado en la 27.430; por lo que esa distinción legal no puede ignorarse.

¹⁵ Sancionada el 19/12/1996 y promulgada el 13/01/1997.

¹⁶ A partir de lo dispuesto en el art. 13 de la ley 26.063 y 8 de la ley 26.735.



Poder Judicial de la Nación

Ahora bien, coincido con la Sra. Auxiliar Fiscal, cuando precisa que la exclusión prevista en el inciso m) del art. 4 de la ley 27.743, resulta operativa en el caso de agentes de retención o percepción que no sean empleadores¹⁷, habida cuenta que la norma expresamente alude a esos sujetos activos de los tipos penales, pero sin referirse a los "empleadores" (que es la otra categoría contemplada como posible sujeto activo de los delitos).

Tal como lo refirió la Sra. Auxiliar Fiscal, incluir a los "empleadores" en esa exclusión importaría ampliar indebidamente el universo de casos expresamente contemplados, en franca violación al principio de legalidad, que impide extender por vía interpretativa el alcance de términos que no surgen de la propia ley ni que pueden considerarse implícitos en ella.

Al respecto, consideró la Fiscalía que ello es "... conforme una interpretación acorde con el principio de máxima taxatividad que, como manifestación de la garantía de legalidad en materia penal, impone la necesidad de practicar una hermenéutica que, con base en los vocablos empleados en la norma, resuelva las dudas interpretativas en la forma más limitativa de la criminalización, sobre todo teniendo en cuenta que la consecuencia interpretativa tampoco resulta absurda en el caso, desde que la distinción entre empleadores y otros agentes de retención y percepción respondería a los distintos regímenes especiales de retención y percepción de seguridad social dispuestos por el organismo recaudador...".

En tal sentido, no debe soslayarse la pauta hermenéutica que establece que cuando una ley es clara y no

¹⁷ Con alusión al criterio establecido por el Sr. Fiscal General Dr. Marcelo Agüero Vera en autos CPE N° 829/2015/TO3 del registro de este TOPE nro.1, caratulados "P.L. RIVERO Y COMPAÑÍA S.A. S/INFRACCIÓN LEY 24.769".



Poder Judicial de la Nación

exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, lo que en este caso conlleva a concluir que la exclusión dispuesta por el inc. m) del art. 4 de la ley 27.743 exclusivamente alcanza a los "agentes de retención y percepción" y que, en dicho supuesto, no quedan incluidos los "empleadores".

En este sentido, cabe resaltar que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación¹⁸ ha establecido que: "... La primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley; no cabe pues a los jueces sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió ... (Fallos 316:2695, entre muchos)... cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contemplado en la norma (Fallos 311:1042)... Desde esta perspectiva, y ante la claridad del precepto en examen, **no cabe al juez interviniente apartarse de la solución impartida por la norma,** toda vez que, no sólo hace una interpretación de una facultad privativa de otro órgano del poder -que en el caso se traduce en una obligación legal para la autoridad de aplicación...- sino que mediaría lo que el Supremo Tribunal ha dado en llamar 'un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso' (Fallos 320:1546)... Una interpretación contraria a la analizada, importaría desvirtuar los fines tenidos en cuenta por el legislador y, consecuentemente, violentar el principio

¹⁸ En el caso B.598.XXXV, de fecha 30/5/2001, con remisión al dictamen del Procurador General de la Nación.



Poder Judicial de la Nación

republicano de división de poderes..." (los destacados son del presente).

D. Consecuentemente y en orden a lo expuesto en los puntos que anteceden, se advierte que el imputado César Javier GALVÁN no se encuentra alcanzado por la exclusión dispuesta en el inc. "m" del ar. 4 de la ley 27.743; toda vez que, VENGER S.A. reviste el carácter de "empleador" de los dependientes de aquella firma; mientras que el nombrado GALVÁN resultan ser tercero solidario de las obligaciones de la seguridad social de la mencionada sociedad.

Por otro lado, corresponde destacar que el propio art. 2 de la ley 27.743 establece que "los contribuyentes y **responsables de las obligaciones** tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social... **podrán acogerse** por las obligaciones vencidas..."; mientras que el art. 12 de esa misma norma prevé que "**Los responsables solidarios** mencionados en el artículo 8° de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones), de Procedimiento Fiscal, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones fiscales, aduaneras o de la seguridad social correspondientes al deudor principal, en tal carácter de responsables solidarios, **podrán adherir al presente régimen.** En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudiera realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá la obligación de presentar declaraciones juradas o liquidaciones determinativas de las obligaciones que se regularicen cuando ellas no hubieran sido presentadas por el deudor principal o la obligación de presentar las declaraciones juradas rectificativas" (los destacados son del presente).



Poder Judicial de la Nación

LA-0-110050

Además, el art. 33 de la Resolución General 5525/2024 -reglamentaria de la referida ley- habilita a adherir al régimen a los responsables solidarios, aun cuando el deudor principal se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el art. 4 de la ley 27.743, en tanto dispone que "... **los responsables solidarios, haya o no mediado contra ellos el reclamo de las obligaciones impositivas, aduaneras o de los recursos de la seguridad social correspondiente al deudor principal, aun cuando este último se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el artículo 4° de la Ley N° 27.743, podrán, en tal carácter, adherir al presente régimen de regularización.** En dicho supuesto y en razón de tratarse de una presentación independiente de la que pudieran realizar respecto de su propia deuda, deberá identificarse al deudor principal y no regirá, respecto del presentante, la obligación establecida en el inciso a) del artículo 4° de esta resolución general..." (el destacado es del presente).

E. Por otro lado, cabe agregar que por el inciso i) del art. 4 de la ley 27.743, se estableció una exclusión subjetiva en relación a los "declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración".

A este respecto, no debe obviarse que el Depto. de Concursos y Quiebras de la ARCA informó que en el proceso caratulado "VENGER S.A. S/QUIEBRA", con fecha 25/04/2022, fue declarada la clausura de los procedimientos por falta de activo¹⁹.

¹⁹ Ver informe agregado a fs. 3/3 de este incidente.



Poder Judicial de la Nación

Ahora bien, también en lo relativo a dicha circunstancia, cabe acudir a lo dispuesto en el art. 33 de la mencionada Resolución General 5525/2024 (reglamentaria de la ley 27.743), que fuera citada mas arriba, que habilita a adherir al régimen en cuestión a los responsables solidarios, aun cuando el deudor principal se encuentre excluido por alguna de las causales previstas en el art. 4 de la ley 27.743, entre las que se encuentra la situación de los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, en los términos previstos en el inciso i) del mencionado art. 4.

En efecto, también a este respecto, y en coincidencia con lo establecido por la representante del Ministerio Público Fiscal, debe postularse una interpretación literal de la norma reglamentaria aplicable, por cuanto la situación falencial que ha informado la ARCA en relación a **VENGER S.A.** -mas allá del estado actual en que se encontraren los autos que se sustanciaron en sede comercial- no obsta a César Javier GALVÁN a los fines de su acogimiento al régimen regulado por la ley 27.743, quien no se encuentra declarado en quiebra, y efectuó el pago respectivo en el marco de este incidente en carácter de responsable solidario de aquella firma; erogación que no puede generar perjuicio alguno al patrimonio de la fallida.

En este sentido, cabe recordar también en este ítem el criterio del Alto Tribunal, en cuanto consideró que "... **la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando esta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por aquella** (Fallos:319:2617 y dictamen de la Procuración



Poder Judicial de la Nación

General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 328:43, entre otros) y no puede llegar al extremo de exigir mayores requisitos que los que aquella impone (del dictamen de la Procuración General al que la Corte remitió en Fallos:339:1514)''²⁰ (el resaltado es de la presente).

En sentido análogo, en relación a la ley 27.541²¹ de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y su resolución reglamentaria, sostuvo el Dr. Luis Gustavo Losada al resolver en los autos CPE 494/2015/T01/12, por decisión de fecha 3 de marzo de 2023, que "... Cuando el art. 16 de la ley n° 27.541 excluye a los declarados en estado de quiebra sin continuidad en su explotación, resulta claro, como también lo advirtiera el Sr. Fiscal General de Juicio, que el sentido de la prohibición estriba en la protección del patrimonio común a sus acreedores de los contribuyentes citados en su art. 8 (o 5 de la ley n° 27.653) ya que precisamente el régimen especial de regularización de deudas importa la cancelación total de la deuda existente (art. 10 2do. párrafo de tal ley). Cuando esa deuda se regulariza mediante compensación, de contado o mediante un plan de facilidades de pago (art. 10 3er. párrafo íd.) llevada a cabo por un responsable solidario que cumple todas las condiciones del art. 4 de la RGeneral AFIP 5201/21 también queda claro que el dinero del caso no sale del patrimonio de persona o entidad fallida alguna que es aquello que quiso prohibir la ley al excluir a tales sujetos de los regímenes especiales. Por ello mismo, exigir que un pago realizado por responsable solidario legalmente habilitado sea improcedente por hallarse en quiebra el deudor principal es

²⁰ Ver autos registrados bajo el CSJ 249/2017/RH1 caratulados "Recurso de hecho deducido por la defensa en la causa Machuca, Rubén Sergio s/ lesiones gravísimas (art. 91)".

²¹ De contenido similar a la ley 27.743.



Poder Judicial de la Nación

consagrar una interpretación irrazonable de las normas in malam partem".

F. Por último, cabe concluir que el imputado César Javier Galván, tampoco se encuentra alcanzado por ninguna de las restantes causales de exclusión previstas en los incisos "j", "k" y "l" del artículo 4 de la referida ley 27.743; en la medida que de los informes remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia surge que el nombrado Galván carece de antecedentes computables.

21) Que, en ese contexto, en la medida en que las obligaciones tributarias derivadas del objeto de imputación en la presente causa [enunciadas en el apartado I.1) de la presente] vencieron con anterioridad al 31/03/2024, fueron canceladas por el "**responsable solidario**" de la firma VENGER S.A. en forma previa a la entrada en vigencia de la ley 27.743 (tal como lo contempla el art. 5°, tercer párrafo, de dicha ley); y que no se advierte la concurrencia de ninguna de las causales excluyentes prescriptas por la referida norma en relación al imputado César Javier GALVÁN (ver lo mencionado en el considerando 19° -ítems C al F inclusive- y lo prescripto en el art. 4° del régimen), resultan aplicables los beneficios establecidos en aquella norma.

22) Que, en consecuencia, el suscripto considera que corresponde declarar la extinción de la acción penal seguida a César Javier GALVÁN con orden a los hechos aludidos en la consideración I.1), y -en consecuencia- sobreseer al nombrado en orden a tales sucesos (arts. 336 -inc. 1°- y 361 del C.P.P.N. y art. 5, tercer párrafo, de la ley 27.743).

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la Sra. Auxiliar Fiscal, es que se;

RESUELVE:

Fecha de firma: 07/03/2025

Firmado por: IGNACIO CARLOS FORNARI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: ANDRES JOSE LOPEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#39158305#446555300#20250307003852817

Poder Judicial de la Nación

I. DECLARAR LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL seguida en estas actuaciones con respecto a **César Javier GALVÁN** (de las demás condiciones personales mencionadas al inicio), en orden a los hechos que se le imputaran en los requerimientos de elevación a juicio (mencionados en el considerando 1° de la presente resolución) y, en consecuencia, **SOBRESEER** al nombrado en orden a tales sucesos (arts. 336 -inc. 1°- y 361 del C.P.P.N. y art. 5, tercer párrafo, de la ley 27.743).

II. SIN COSTAS (arts. 530 y ccdts. del C.P.P.N.).

III. TENER PRESENTES las reservas de recurrir en Casación y de Caso Federal formuladas por la defensa de **César Javier GALVÁN**.

Regístrese, protocolícese, y notifíquese a las partes. Firme que sea, realícense las comunicaciones pertinentes, dispóngase lo necesario respecto de los efectos secuestrados, la documentación reservada, medidas cautelares y -luego- archívese. Asimismo, déjese nota en las actuaciones principales.

